

INFORMARTIVO DE RELATORIA

AGOSTO 2023

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA



Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussan Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Sala Especial de Decisión Catorce C.P. Alberto Montaña Plata	Acción de Grupo <u>68001-33-31-014-2013-00158-01</u> Auto de unificación jurisprudencial del 17 de mayo de 2023
<p>La Sala unificó la jurisprudencia indicando que respecto de las demandas presentadas en vigencia de la Ley 1437 de 2011, CPACA, la acción de grupo procede para reparar integralmente perjuicios causados por una causa común ocurrida en el contexto de las relaciones laborales o de empleo público. Dicha causa puede consistir en un hecho, una omisión, una operación o un acto administrativo de contenido particular.</p> <p>Argumentó la Corporación, que la acción de grupo procede para reparar perjuicios a cualquiera de los derechos constitucional y legalmente previstos, sin que exista razón constitucional ni legal que excluya de su ámbito de protección los asuntos laborales.</p> <p>Así mismo, que el carácter indemnizatorio de la acción de grupo debe ser interpretado de manera amplia y no restrictiva, con el fin de desarrollar y facilitar su acceso, en concordancia con su vocación de ser un mecanismo eficaz para la tutela judicial de los derechos.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta C.P. Luis Alberto Álvarez Parra	Nulidad Electoral <u>17001233300020220027001</u> Auto del 01 de junio de 2023
<p>La Sección al resolver recurso de apelación contra auto en el que se negó la suspensión provisional de actos por los cuales se nombró representante ad hoc del Consejo Académico ante el Consejo Superior de la Universidad de Caldas y el suplente; resolvió la existencia de carencia actual de objeto sobre la medida cautelar solicitada.</p> <p>Adicionalmente, exhortó al Tribunal Administrativo de Caldas, para que, previo a decidir sobre la admisión de la demanda y la procedencia de la medida cautelar se corra traslado a quien actúe en condición de demandado. Arguyó que, si bien la normativa que rige el procedimiento electoral no prevé expresamente que se deba correr traslado de tal solicitud, en aras de garantizar el derecho de defensa y contradicción, así como de la supremacía e integridad del ordenamiento jurídico, se dé aplicación a lo dispuesto en el artículo 233 de la ley 1437 de 2011.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio	Nulidad Electoral 68001 23 33 000 2022 00139 02 Sentencia del 13 de julio de 2023
<p>La Sección al confirmar recurso de apelación contra sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en la que se negaron las pretensiones de la demanda; conminó al Tribunal para que en lo sucesivo no omita la realización de la audiencia inicial de que trata el artículo 283 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los eventos en que no se configuren los presupuestos consagrados en el artículo 182A para dictar sentencia anticipada.</p> <p>Esto, en atención a que, el Tribunal no llevó a cabo la audiencia inicial y fijó el litigio y decretó pruebas mediante auto escrito, pese a que no se configuraba ninguno de los eventos para dictar sentencia anticipada.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B C.P. César Palomino Cortés	Ejecutivo 54001-23-31-000-2010-00255-02 (1707-2015) Sentencia del 19 de enero de 2023
<p>La Subsección destacó la competencia del juez en el proceso ejecutivo para decretar de oficio la excepción de pago y, en consecuencia, dar por terminado el proceso.</p> <p>Indicó que el artículo 164 del CCA reproducido por el artículo 187 del CPACA, le reconoce al juez la facultad de pronunciarse al momento de dictar sentencia, respecto de las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada, lo cual significa en otras palabras, frente a aquellas que no fueron propuestas por la parte interesada pero que el fallador de manera oficiosa encuentre demostradas.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<p>Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas</p>	<p>Nulidad y Restablecimiento del Derecho Acción de Lesividad 76001-23-31-000-2009-00300-01 (3150-2022) Sentencia del 29 de junio de 2023</p>
<p>La Sección confirmó sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró la nulidad del acto que reconoció a la demandada pensión de vejez y que la condenó a reintegrar lo percibido por dicha prestación debidamente indexada.</p> <p>Consideró la Corporación que el actuar con rectitud y honestidad es una exigencia que se deriva del principio general de la buena fe, sin que haga falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración</p> <p>Que, en el caso concreto, la beneficiaria de la pensión no demostró que cumplía con los requisitos de edad y tiempo de servicios requeridos para beneficiarse de la prestación pensional, pese a los múltiples requerimientos que se le hicieran en la actuación administrativa, ni acudió a la instancia judicial, motivo por el cual es dable inferir que, se benefició del error en que se incurrió en el acto de reconocimiento.</p> <p>Adicionalmente, llamó la atención por el hecho de que, pese a que desde el mes de abril de 2007 se suspendió el pago de su mesada pensional, la demandada no hubiera acudido por su propio interés ante Colpensiones a exigir el restablecimiento de su presunto derecho pensional.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<p>Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B C.P. Fredy Ibarra Martínez</p>	<p>Reparación Directa 54001-23-31-000-2013-00003-01 (62.077) Sentencia del 25 de mayo de 2023</p>
<p>La Sección confirmó sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que declaró la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, con el que se pretendía la indemnización de perjuicios por la terminación del</p>	

periodo como alcalde del municipio de Sardinata (Norte de Santander) del demandante por sentencia de la Corte Constitucional que dejó sin efectos decisiones proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en su lugar ordenó el reintegro de otra persona como alcalde del mismo municipio sin necesidad de nueva posesión para que culminara su periodo constitucional.

El Alto Tribunal consideró que, el término de caducidad del medio de control debe ser contabilizado a partir de la fecha en que el actor conoció la decisión de la Corte Constitucional al ser la providencia acusada como causante del daño alegado.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
<div>Consejo de Estado</div> <div>Sala de lo Contencioso Administrativo</div> <div>Sección Cuarta</div> <div>C.P. Wilson Ramos Girón</div>	<div>Nulidad y Restablecimiento del Derecho</div> <div>54001-23-33-000-2020-00053-01</div> <div>(26.571)</div> <div>Sentencia del 19 de julio de 2023</div>
<p>La Sección revocó sentencia apelada dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que negó las pretensiones de la demanda con la que se pretendía la nulidad de actos administrativos expedidos por la UGPP que determinó aportes al Sistema de la Protección Social a cargo del demandante y le impuso sanciones por omisión e inexactitud. En su lugar, declaró la nulidad parcial de los actos acusados, y a título de restablecimiento del derecho declaró que la sociedad no adeudaba suma por aportes al SPS y la multa impuesta, por haber operado la caducidad de la potestad de gestión.</p> <p>Consideró la Sala que, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1607 de 2012, el acto que tiene la aptitud para impedir la caducidad de la potestad de gestión de la demandada, es el requerimiento para declarar y/o corregir, y no el requerimiento de información, al tratarse de un medio para verificar la autoliquidación de los aportes, pero no ser el que da inicio a la acción administrativa de determinación de los aportes.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar	Sentencia SU-296 de 2023 Comunicado No. 025
<p>La Sala Plena de la Corporación se pronunció sobre acciones de tutela acumuladas, interpuestas por empleados judiciales que, al momento de la presentación de la solicitud de amparo, laboraban en despachos judiciales cuyo régimen vacacional es individual y un juez cuyo régimen de vacaciones es colectivo, al que se le ordenó suspender sus vacaciones en atención a que fue designado para cumplir con la función de control de garantías durante dicho lapso. Se indica, que cada uno de los actores había solicitado a su correspondiente nominador la autorización de disfrutar los periodos de vacaciones individuales previamente causados, pero dicha autorización fue negada en todos los casos, aduciendo la existencia de necesidades del servicio, así como la eventual afectación del funcionamiento de los despachos judiciales debido a la sobrecarga laboral.</p> <p>La Corte ordenó conceder a diferentes accionantes vacaciones, y a las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial accionadas a realizar los trámites financieros y administrativos necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio a cargo de los despachos judiciales.</p> <p>Así mismo, la Sala ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que, previa consulta y/o participación de los jueces, adopte la reglamentación necesaria para garantizar la efectividad del derecho a las vacaciones que se ejerzan en forma individual al interior de la Rama Judicial, y se prevenga la aplicación de razones de orden presupuestal, logístico o administrativo como barreras para el disfrute de dicho derecho, en los términos señalados en esta sentencia.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar	Sentencia SU-306 de 2023 Comunicado No. 028
<p>La Sala Plena de la Corte Constitucional analizó una acción de tutela presentada por una persona privada de la libertad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a escoger profesión u oficio y los derechos de los niños y adolescentes; dado que no le permitieron desarrollar actividad de bisutería durante su tiempo de reclusión.</p> <p>La Corte consideró que el INPEC debe garantizarle a las personas privadas de la libertad su derecho a la resocialización mediante actividades de trabajo y estudio, entre otras, para preparar a la persona recluida para su regreso a la vida en sociedad, ordenándole a la entidad diseñar e implementar el plan integral de programas y actividades de resocialización (PIPAR).</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Alejandro Linares Castillo	Sentencia SU – 316 de 2023 Comunicado No. 029
<p>La Sala Plena de la Corte Constitucional revisó sentencias dentro de un proceso de tutela en contra de providencia de segunda instancia del Consejo de Estado, en el marco de un proceso de reparación directa contra el Ministerio de Defensa- Ejército Nacional en el que se pretendía el resarcimiento de los perjuicios sufridos por un menor de edad y su familia con ocasión de lesiones recibidas por la caída de un portón vehicular averiado sobre su cuerpo al salir de una unidad militar en la ciudad de Pereira, que le representaron una pérdida de capacidad laboral del 86,50 %.</p> <p>Consideró la Sala que, resultaba contradictorio que la autoridad accionada determinara como probada la eximente de responsabilidad causa extraña por el hecho de un tercero, pese a que también concluyó que el daño se había originado en la falta de reparación del portón vehicular averiado, más cuando para la configuración de la causa extraña por el hecho de un tercero es menester demostrar que ésta fue la que de manera determinante y exclusiva provocó el daño</p> <p>La Corporación revocó sentencia sentencias de tutela proferidas por el Consejo de Estado, concedió el amparo al derecho fundamental al debido proceso y al derecho de acceso a la administración de justicia de los accionantes, y dejó sin efecto sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado y ordenó proferir una sentencia teniendo en cuenta la responsabilidad exclusiva del Estado.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Juan Carlos Cortés González	Sentencia C-324 de 2023 Comunicado No. 030
<p>La Corte declaró la exequibilidad de las expresiones “trabajadora”, “madre” y “mujer” contenidas en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 2 de la ley 2114 de 2021 (relacionado con la licencia en la época del parto e incentivos para la adecuada atención y cuidado del recién nacido), en el entendido que las licencia en la época del parto también son aplicables a hombres trans y personas no binarias.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Juan Carlos Cortés	Sentencia T-174 del 24 de mayo de 2023
<p>La Corte analizó tutela presentada por una mujer a favor de su hijo, luego de que el Hospital Julio Méndez Barreneche se negó a realizarle una segunda intervención quirúrgica al menor, aduciendo que se no se encontraban afiliados al sistema de salud, quienes son venezolanos en trámite a regularizar su situación al país.</p> <p>La Sala reiteró que el Estado tiene la obligación de prestar los servicios de salud a los menores de edad y que debe garantizarles un tratamiento integral, adecuado y especializado, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes migrantes, a pesar de que no estén afiliados al sistema de seguridad social.</p> <p>Aunque la Corte declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta que la estadía en el país de la mujer y su hijo se regularizó y cuenta con afiliación al sistema de salud a través de una EPS, prestando la atención requerida; previno a la entidad accionada para que, en adelante, se abstenga de interrumpir la prestación de servicios de salud requeridos por niños, niñas y adolescentes, incluyendo los migrantes, en observancia del principio de continuidad del servicio de salud, en los casos en que el tratamiento haya iniciado.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Natalia Ángel Cabo	Sentencia T-241 del 06 de julio de 2023
<p>La Corte al estudiar el caso de un hombre que pretendía que una publicación efectuada de manera anónima en la red social Facebook en la que se le atribúan actos de violencia sexual contra mujeres fuera eliminada y que la denunciante anónima se retractara, se constató que la persona que hizo la publicación de manera anónima acudió a las vías institucionales para denunciar los actos de violencia sexual y física de los que presuntamente fue víctima.</p> <p>El Alto Tribunal confirmó las decisiones de instancia y negó el amparo solicitado, considerando que, el “escarche” es un ejercicio de la libertad de expresión y un mecanismo legítimo que tienen las mujeres para denunciar públicamente y por medios no institucionales los actos de violencia basada en género de los que son víctimas. Concluyó, tras una ponderación entre los derechos en tensión, que la eventual afectación que pueda sufrir el accionante en su derecho a la honra y buen nombre es inferior a la que supondría imponer una restricción a la posibilidad de la mujer, presunta víctima de violencia sexual, pueda expresar libremente los hechos que asevera haber sufrido.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Diana Fajardo Rivera	Sentencia T-238 del 04 de julio de 2023
<p>La Corte estudió tutela interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de Quindío por decisión judicial de segunda instancia, que revocó el fallo que había accedido a las pretensiones de reparación directa, declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control, y negó las pretensiones de la demanda.</p> <p>Los hechos tienen que ver con el diagnostico de una mujer con tumor cerebral para el año 2009, con episodios previos de crisis de migraña en el 2002, 2005 y 2007. Quien fue intervenida quirúrgicamente en febrero de 2010 y días después falleció.</p> <p>La Sala consideró que el tribunal incurrió en defecto sustantivo al aplicar erróneamente el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo, por contabilizar la caducidad del daño antijurídico generado por la muerte de la mujer desde su diagnóstico y no desde la fecha de su muerte.</p> <p>La Corporación revocó la decisión proferida por el Tribunal y le ordenó que profiriera un nuevo fallo judicial en el que resolviera de fondo teniendo en cuenta lo dispuesto en la sentencia de tutela.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Alejandro Linares Cantillo	Sentencia T-298 del 4 de agosto de 2023
<p>La Corte revocó la sentencia proferida por un juzgado de Zipaquirá, Cundinamarca, que negó amparar los derechos al debido proceso y administración a la justicia de un ciudadano, quien presentó la impugnación a una tutela, vía correo, el último día de plazo que establece la norma.</p> <p>La Sala recordó que, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, cuando es comunicada una providencia por medio de correo electrónico, ésta se entenderá notificada “una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje”.</p> <p>A partir de los elementos de juicio obrantes en el expediente, la Sala para determinar la fecha de recibo de la comunicación por correo electrónico, tuvo en cuenta</p>	

pantallazo arrimado por el accionante, que daría cuenta de la recepción del fallo de tutela.

Resolvió así, conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del accionante y ordenó al juzgado accionado tramitar la impugnación presentada en el marco del procedimiento de tutela promovido.